

Sumario

Editorial: La política económica *Página 1***en 30 años de democracia: una historia con final abierto**

Ensayo general *Página 4***Por Miguel Zanabria**

Asignación por Hijo y *Página 17***deducciones equivalentes, ¿Es igual para tod@s?****Por Fernando Alvarez**

Heterogeneidad estructural: *Página 28***origen y evolución del concepto frente a los nuevos desafíos en el contexto de la mundialización del capital****Por Matías Mancini y Pablo Lavarello**

Análisis en torno al excedente y *Página 35***su acumulación****Por Gerardo De Santis y Julián Barberis**

Staff**DIRECTOR**
Lic. Gerardo De Santis**COORDINADOR**
Lic. Germán Saller**CONSEJO EDITORIAL**
Lic. Alfredo Iñiguez
Dr. Pablo Lavarello
Lic. Miguel Zanabria**EQUIPO DE INVESTIGACIÓN**
Lic. Fernando Alvarez
Lic. Julián Barberis
Lic. Guillermo Bellingeri
Lic. Roberto Collivignarelli
Lic. Matías Mancini
Lic. Manuel Rodríguez
Lic. Rafael A. Selva
Cdr. Diego Turkenich
Lic. Julieta Biasotti
Lic. Josefina Marcelo**ÁREA DE PRENSA**
Lic. Edgardo Corroppoli
Lic. Federico Serra

Entrelíneas de la Política Económica

Editorial: La política económica en 30 años de democracia: una historia con final abierto

El 10 diciembre de 2013 se cumplieron 30 años de democracia ininterrumpida luego de la más sanguinaria dictadura militar que se tenga memoria. El desafío en 1983 era enorme porque la dictadura fue pensada y diseñada por el poder económico como una instancia de cambio no solo político sino económico, social y cultural. El daño perpetrado fue desolador.

El gran desafío del primer equipo económico fue la forma de afrontar y definir qué hacer con la deuda externa, que había pasado de unos u\$s 5.000 millones en 1976 (cuando se produce el golpe militar) a más de u\$s 31.700 millones en 1983 y que prometía ser, por el peso en dólares de los intereses y el impacto sobre el presupuesto público, uno de los principales escollos para el crecimiento. En un trabajo realizado por el CIEPYC hemos analizado en detalle la historia de la deuda externa argentina desde su origen en la dictadura militar.

La discusión pública y ciudadana sobre la legalidad y legitimidad de la deuda era una compulsa que, naturalmente, también se vivía dentro del gobierno que finalmente inclinó la balanza por el reconocimiento y asunción de los compromisos externos. Ese fue el motivo de la eyección del ministro Bernardo Grinspun quien había asumido como el primer Ministro de Economía de la democracia y durante su gestión intentó priorizar un modelo de acumulación basado en el mercado interno, el poder adquisitivo de los trabajadores, el empleo y la distribución del ingreso, algo que solamente se volvió a ver casi 20 años después en el período que se inició en 2003.

A partir del reconocimiento de la legitimidad de la deuda, comienza una larga historia de políticos (y políticas) condicionados por el poder económico representado por el FMI. Los recetarios del FMI basados en planes de ajuste del gasto se sucedían así como sus fracasos (Plan Austral, Plan Primavera I, Plan Primavera II). La presión de los intereses de la deuda impedía cualquier intento por generar una política autónoma ya que no podía ser abordada en su totalidad y eso implicaba mayor endeudamiento y mayor atadura de manos ante el FMI.

El golpe económico perpetrado contra el gobierno debilitado de Raúl Alfonsín, que terminó con un proceso hiperinflacionario sin precedentes, aceleró el advenimiento de una etapa que vino a terminar el trabajo inconcluso que había comenzado la dictadura militar y que imaginaba el poder económico allá por 1976: dismantelar las bases de integración social y económica que había caracterizado a la economía argentina desde el primer peronismo.

El triunfo de Carlos Menem en 1989, bajo el espejismo de la revolución productiva y el salarizado, fue el encargado de eliminar todo vestigio mercado internista, productivo, industrial y, consecuentemente, de empleo y de salario. Fue el encargado de la aplicación completa del vademécum del Consenso de Washington. Allí se completó la definitiva delegación de la política a la economía. La política fiscal estaba condicionada al pago de la deuda y la política monetaria era endógenamente determinada por el resultado de la

balanza de pagos que era el espejo de la obscena inserción internacional. La apreciación cambiaria acompañada de un proceso radical de liberalización comercial terminó de destruir la base productiva nacional, llevando a los sectores ingeniería intensivos a su mínimo histórico desde inicios del siglo XX. La difusión de nuevas tecnologías se centró en las actividades agrícolas pampeanas (lideradas por la soja) que adoptaron paquetes tecnológicos importados, desplazando a otros cultivos y renovando el sueño de la argentina granero del mundo.

Más allá del desguace constante del Estado, que incluyó entre otros activos (YPF, teléfonos, agua, gas, etc.) la entrega de la seguridad social a las AFJP, la asociación del peso al dólar a través de la convertibilidad fue una construcción cultural muy fuerte que se constituyó en una especie de plan premeditado para eliminar la moneda nacional y reemplazarla por el dólar, hecho que afortunadamente no se pudo perpetrar.

Toda la política económica de los 90 tuvo como objetivo la típica pasividad neoliberal de "generar las condiciones" o "señales" para que el sector privado sea el motor del crecimiento y se consolidara un perfil de especialización basado en la explotación de materias primas que es incapaz de absorber a la totalidad de la población. Claro ejemplo fue la reducción de aportes patronales de las grandes empresas de servicios que además de vaciar las arcas del Estado no lograron apaciguar la destrucción de empleos que siguió batiendo récords a pesar de la "señal" de reducción de costos laborales para contratar. Una vez que los activos estatales habían sido entregados a cambio de papeles de deuda sin valor (títulos que cotizaban a u\$s 30 se los reconoció a u\$s 100), necesitaban la droga del endeudamiento (y sus negocios colaterales) para frenar la sangría de dólares de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

El proceso no se detuvo durante la breve gestión económica del gobierno de Fernando De la Rúa donde la lógica de la delegación de lo económico a representantes del poder, el ajuste y el endeudamiento se profundizaron hasta el extremo.

Con una desocupación del 25%, una pobreza del 55%, una deuda de casi 1,7 veces el PBI, la crisis económica y social sembró un escenario de transición donde más por decantación que por decisión propia, se corrieron los ejes de la política económica: la deuda se dejó de pagar, el FMI dejó de monitorear lo imposible y se abandonó el tipo de cambio fijo con el dólar. Quizás el logro más importante de esta etapa fue no caer en la tentación de pisar el palito del dólar como moneda oficial propia, tal como se sugería desde los principales centros académicos de la ortodoxia liberal (además de otros hits como privatizar la recaudación tributaria o sacar la banca del país y funcionar of shore).

Las elecciones de 2003 abrían una posibilidad de terminar definitivamente con la etapa anterior aunque la expectativa de cambio era tan baja después de lo que nos había dejado el proceso iniciado en 1976 y la década del noventa, que hacía pensar que era imposible salir de una situación defensiva en materia de política económica y conseguir mitigar los efectos del retroceso del Estado, detener la destrucción de puestos de trabajo, frenar la pobreza estructural, revertir el desmantelamiento del sistema de seguridad social, contrarrestar la destrucción de la industria nacional, etc.

El proceso iniciado en 2003 jamás hubiera sido posible sin la recuperación de la política como instrumento de transformación de la realidad revirtiendo la dependencia de la política a la economía que había funcionado en mayor medida en los 20 años anteriores. Ese fue el cambio más sustantivo que se produjo en la política económica en la democracia desde 1983.

Los principales ejes sobre los cuales se apoyó la gestión fueron: el rechazo de la

inserción comercial subordinada a Estados Unidos y la renegociación de la deuda con los tenedores privados (títulos que cotizaban a u\$s 30 se los reconoció a u\$s 35) junto a la posterior cancelación de la deuda con el FMI. La primera nos liberaría del proyecto de unificación de la región en el ALCA y la segunda de la tutela política del FMI. Ambas medidas implicaron mayores grados de libertad para aplicar la política económica. En un contexto de tipo de cambio administrado el impulso al mercado interno fogoneado por la recuperación del salario mínimo y las negociaciones colectivas entre capital y trabajo, sentaron las bases de la expansión de la construcción y de la industria, apoyada en sectores trabajo intensivos y de ensamble como la electrónica y el sector automotriz, posibilitaron la recuperación del empleo.

Sin embargo, esta mayor autonomía, puso rápidamente de manifiesto más abiertamente los límites estructurales que enfrenta un país periférico y los conflictos internos que se generan con el poder económico cuando se pretende llevar adelante una estrategia de desarrollo que busque ir más allá de la especialización en recursos naturales (por más tímida que sea). Muestras de ello son las tensiones con la rebelión fiscal del sector agropecuario en 2008 y 2009 ante el intento de establecer retenciones móviles y diferenciales, con la ley de medios en los últimos 4 años, con las estatizaciones de las AFJP, Aerolíneas Argentinas e YPF. Estas pujas demuestran que aún la democracia sigue condicionada por una larga historia de respeto a las ventajas comparativas del suelo, por los grupos económicos locales y extranjeros y que librar esas batallas conllevarán un sinnúmero de conflictos y marchas atrás, en los cuales el mantenimiento de la conducción política sigue siendo el reaseguro contra una restauración conservadora que limite los derechos y el cambio estructural. Una vez más la suerte de la democracia se dilucida en la resolución de la disputa entre un sendero de desarrollo inclusivo y uno que perpetúa el carácter atrasado y dependiente.

En este número de Entrelíneas Miguel Zanabria aborda la crisis internacional en "Ensayo general", Fernando Alvarez plantea algunas consideraciones para mejorar la progresividad en el régimen de asignaciones familiares en "Asignación por Hijo y deducciones equivalentes, ¿Es igual para tod@s?"; y además los resúmenes de dos trabajos presentados en las XIV Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia, Universidad Nacional de Cuyo, en octubre de 2013, en primer término "Heterogeneidad estructural: origen y evolución del concepto frente a los nuevos desafíos en el contexto de la mundialización del capital" por Matías Mancini y Pablo Lavarello y "Análisis en torno al excedente y su acumulación" por Gerardo De Santis y Julián Barberis.